**JUZGADO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N°3
CADIZ**

Avd. Ana de Viya 7, Edificio Proserpina, 1ª
Planta

Tel.: 956-101351; 956-902268

Fax: 956-011521

N.I.G.: 1101245020150003042

Procedimiento: Derechos Fundamentales 710/2015. Negociado: C

Recurrente: [REDACTED]

Letrado: **JOSE MARIA ROSSO LOPEZ**

Procurador: [REDACTED]

Demandado/os: **AGENCIA ESTATAL DE LA ADM. TRIBUTARIA**

Representante: **ABOGADO DEL ESTADO**

Letrados: **ABOGADO DEL ESTADO**

Acto recurrido: **Actuación de la Inspección de Hacienda de la A.E.AT. de Cádiz de entrada en domicilio social**

[REDACTED]
**PROCURADORA
NOTIFICADO VIA LEXNET
DÍA 13.04.2016**

SENTENCIA N° 129/2016

En Cádiz, a treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.

Vistos por mí, la **ILMA. SRA. Dª CARMEN MARCED CAÑETE, MAGISTRADA-JUEZ DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N° 3 DE CÁDIZ**, los autos correspondientes al recurso contencioso-administrativo **PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 710/15**, interpuesto por la mercantil [REDACTED], representada por la Procuradora Dª [REDACTED] Roche y asistido del Letrado D. José María Rosso López, contra la **AGENCIA TRIBUTARIA**, cuya representación y defensa corresponde al Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la indicada recurrente, el 15 de octubre de 2015 se interpuso recurso contencioso-administrativo especial de protección de los derechos fundamentales contra la actuación de la Inspección de la Agencia Tributaria personándose y realizando actuaciones de inspección en su sede social, sita en la Avenida Juan Carlos I, Edificio Carranza, planta [REDACTED] en Cádiz, sin autorización judicial de entrada.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de 20 de octubre de 2015 se admitió a trámite como procedimiento especial, concediendo plazo de cinco días para la remisión del expediente administrativo.

TERCERO.- EL 9 de noviembre de 2015 se formalizó escrito de demanda, instando se declare la existencia de vía de hecho en la actuación de la Inspección de Hacienda con infracción del artículo 18.2 CE y acuerde el cese de la actuación, así como el restablecimiento de la situación anterior a la vía de hecho mediante la devolución de las copias obtenidas de los ordenadores.

El 19 de noviembre de 2015 se formalizó escrito de contestación a la demanda por el Ministerio Fiscal.

El 1 de diciembre de 2015 se formalizó escrito de contestación a la demanda por el Abogado del Estado, alegando lo que a su derecho convino e instando su desestimación con expresa condena en costas.

CUARTO.- Mediante Auto de 16 de diciembre de 2015 acordó el recibimiento a prueba, admitiendo las pruebas propuestas, documentales y testificales, salvo la de D^a [REDACTED] por haber depuesto como testigo en el incidente de medida cautelar y considerarse innecesario su repetición; cuestión contra la que se interpuso recurso de reposición que finalmente admitido para evitar cualquier tipo de indefensión.

QUINTO.- En los días 11 de enero y 4 de febrero de 2016 se practicaron las pruebas propuestas en concreto las testificales de D. [REDACTED], D^a [REDACTED] D. [REDACTED] D. [REDACTED] y D^a [REDACTED]

SEXTO.- Practicadas las pruebas con el resultado que consta en autos, se presentaron escritos de conclusiones por las partes, los días 23 de febrero , 7 y 21 de marzo de 2016, respectivamente, reiterando sus pretensiones iniciales, quedando mediante Diligencia de Ordenación de 21 de marzo de 2016 los autos conclusos y pendientes de fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso analizar la conformidad al artículo 18.2 CE la actuación de la Inspección de la Agencia Tributaria personándose y realizando actuaciones de inspección en su sede social, sita en la Avenida Juan Carlos I, Edificio Carranza, [REDACTED] en Cádiz, sin autorización judicial de entrada.

En el expediente consta que el 15 de septiembre de 2015 se concedió por el Delegado Especial de la AEAT autorización administrativa para la entrada en fincas y locales del obligado tributario y en concreto para uno de los establecimientos abiertos al público titularidad de la recurrente, así como para la sede social, sita en ~~la Avenida Juan Carlos I, Edificio Carranza, [REDACTED]~~ en Cádiz. La entrada en la sede social se produce a las 10 de la mañana del día 17 de septiembre de 2015, sin autorización judicial, y se desarrolla hasta las 17,00 horas, aproximadamente. Tras varias horas y previo al volcado de datos se realiza diligencia donde consta que la recurrente y en su nombre su Administrador, consentía la entrada en el domicilio, si bien esta incluyó una observación al entender que la misma se había obtenido admitiendo la veracidad de las informaciones vertidas por el Inspector sobre la adopción de medidas cautelares.

SEGUNDO.- Varias son las cuestiones que deben ser analizadas, la primera de ellas será si efectivamente el lugar donde se produjo la entrada está constitucionalmente protegido, pues será en este donde se exige la autorización judicial, en caso de oposición del titular.

Así los artículos 142 y 113 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT), establecen la obligación que para el ejercicio de las actuaciones inspectoras cuando sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido se deberá obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial; en igual sentido el artículo 172 del Reglamento General de Aplicación de los Tributos de 27 de julio de 2007.

El artículo 18.2 de la Constitución Española (CE) establece que el domicilio es inviolable, añadiendo que ninguna entrada o registro puede hacerse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito; esta protección abarca también a las

personas jurídicas, como vino a mantener la STS de 23 de abril de 2010, dictada por el Pleno del Tribunal Supremo, que mantuvo que las sedes sociales tienen la condición de domicilio constitucionalmente protegido. Esta línea es la seguida por en el ámbito administrativo por el artículo 96.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJAP), referido a los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos, dispone que "si fuere necesario entrar en el domicilio del afectado, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, autorización judicial", y por el citado artículo 142 LGT.

En el caso de autos estamos ante la sede social de la mercantil recurrente, y al parecer de otras entidades, que no puede considerarse como establecimiento abierto al público, sin perjuicio que pueda existir un horario de atención al público, como parece que ocurría en este sitio donde en el puerta aparece un horario de atención, aunque la puerta estaba cerrada como han manifestado todos los testigos y el Inspector y sus ayudantes tuvieron que llamar al timbre para proceder a su entrada.

Por ello salvo que se obtenga autorización de su titular, es imprescindible la previa autorización judicial de entrada, sin que la autorización administrativa le autorice a entrar y por tanto a adoptar ninguna medida que tuviera que llevarse a cabo en su interior, incluyendo la retirada de los ordenadores, como parece que mantuvo por el Inspector en la actuación llevada a cabo.

TERCERO.- Visto que no existía autorización judicial de entrada, que podría haberse inclusive tramitado inaudita parte, la cuestión de centra en analizar si existió autorización de su titular, como parece deducirse de la diligencia firmada por este horas después de producirse la entrada.

Conforme resulta de la prueba practicada el Inspector y sus ayudantes entraron en la sede social tras llamar a la puerta y ser abiertos por una empleada, preguntando por el titular de la actividad, al que se pudo localizar unos 30 minutos después y que no se presentó en la sede hasta al menos 1 hora junto con su asesor fiscal, momento en el que no consta que dieran su autorización sino que entraron en una discusión que duró varias horas, hasta que finalmente y ante las advertencias de adoptar medidas cautelares de retirada de los

ordenadores con el perjuicio consiguiente, se procedió a conceder la autorización, no sin antes hacer la observación que consta en las diligencias. Consta que previamente a la obtención de la autorización se había procedido a entrar en los ordenadores a los efectos de poder controlar cual debían ser las actuaciones necesarias para la posterior descarga.

¿Este consentimiento está viciado, o se produjo con todas las garantías?

Es cierto que cualquier actuación inspectora y más la llevada a cabo por la Agencia Tributaria conlleva por su propia naturaleza un elemento coactivo, por lo que no puede entenderse que la autorización de entrada se concede por el titular de forma espontánea y libremente, en ningún caso, sino que la misma se produce en una valoración de las circunstancias en juego y así debe entenderse.

Ahora bien, la autorización debe ser previa a la intervención y desarrollarse con un margen de libertad de decisión, cuestiones que no concurren en el caso de autos, ya que horas antes de obtener la autorización y aunque no se había producido el volcado de información de los ordenadores que era su objetivo, los funcionarios se encontraban en la sede social y pasaron horas discutiendo sobre si procedía o no la autorización judicial de entrada, lo que pone en evidencia su negativa a que se produjera la actuación inspectora; la autorización final está por tanto viciada por cuanto se ha obtenido tras una presión que excede de lo constitucionalmente permitido.

Por ello se puede concluir que la actuación inspectora no ha respetado el artículo 18.2 CE por haberse realizado sin la preceptiva autorización judicial, vista la negativa de la recurrente a conceder la misma, y que la finalmente concedida no es válida pues se ha otorgado de manera viciada.

Visto lo cual procede la estimación del recurso, declarando que la actuación de la Inspección de Hacienda se ha llevado a cabo con infracción del artículo 18.2 CE y acordando el cese de la actuación, con la devolución de los datos y material obtenido en la misma y concretamente de las copias obtenidas de los ordenadores.

CUARTO.- De conformidad con el artículo 139.1 de la LJCA, en la redacción aplicable al caso de autos, procede la condena en costas con un límite de 500 euros.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,

FALLO

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil [REDACTED] [REDACTED] contra la actuación de la Inspección de la Agencia Tributaria en su sede social, sita en la Avenida Juan Carlos I, Edificio Garrocha, [REDACTED] en Cádiz, declarando que la misma se ha llevado a cabo con infracción del artículo 18.2 CE y acordando su cese, con la devolución de los datos y material obtenido en la misma y concretamente de las copias obtenidas de los ordenadores. Con expresa condena en costas hasta un máximo de 500 euros.

Contra esta Sentencia podrá interponer ante este Juzgado, en el plazo de quince días, RECURSO DE APELACIÓN, que se tramitará en la forma prevista en el artículo 85 de la LJCA. Transcurrido este plazo sin haberse interpuesto el citado recurso, la Sentencia quedará firme.

Así por esta mi Sentencia de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo